

PROBLEMAS DE LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Fernando Sánchez Marroyo

La reciente reestructuración, en un sentido descentralizador, del sistema político-administrativo tradicional vigente en el país durante el último siglo y medio, con la completa configuración del mapa autonómico español, culmina, como es bien conocido, un largo proceso de tensiones motivadas por los esfuerzos para conseguir unos ajustes internos, de tipo organizativo y funcional, de la realidad espacial nacional. Significa esto que en el pasado se han venido produciendo unas pautas de comportamiento que permiten explicar la actuación del presente no como algo fruto de la improvisación, artificial¹, sino, muy al contrario, anclado en las tradicionales tensiones centro-periferia que han marcado la contemporaneidad española, en suma, en las características del propio devenir histórico nacional. Se puede afirmar por tanto que en la Historia Contemporánea de España la idea de establecer una nueva vertebración territorial, de reformar la estructura político-administrativa del Estado, rompiendo su carácter fuertemente centralista, ha estado siempre presente². Pero, además, se puede comprobar como, al margen de sus peripecias institucionales, la concepción de este proceso descentralizador no ha sido uniforme (ni en su basamento teórico ni en su formulación territorial, y sobre esto último se centra nuestro trabajo), sino múltiple y vacilante, fruto de las muy diversas orientaciones que han terminado confluyendo en él.

La cuestión a considerar es doble. Por un lado, al margen de los planteamientos regionalistas-nacionalistas, surgidas con posterioridad en el seno del Estado Liberal-Burgués, se han venido produciendo, desde antes incluso de la desaparición de la Monarquía Absoluta, formulaciones que defendían una particular organización territorial del país, partiendo de las viejas unidades administrativas, reflejo, en algu-

¹ Bien entendido que aquí de lo que se trata es de analizar un problema puramente administrativo, en modo alguno se entra en el tema de la existencia o no de peculiaridades legitimadoras de la reclamación autonómica, innecesarias, por lo demás, en la actualidad, dado el criterio puramente funcional que recoge la Constitución.

² Es un problema que ha sido muy debatido desde diferentes perspectivas, la mayoría de ellas moviéndose en el campo del federalismo o del nacionalismo-regionalista. Una perspectiva novedosa es la que insinuó, desde un punto de vista sistémico, Rodríguez de las Heras, A., «Andalucía en la quiebra del sistema Geopolítico español» en *Actas I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea*, Córdoba, Caja de Ahorros, 1979, pp. 413-422.

nos casos, de la peculiar constitución de la unidad nacional. Por otro lado, dentro de cada una de las nuevas unidades organizativas han surgido fenómenos de disidencia secesionista, manifestación de sentimientos centrífugos, que pudieran parecer poco acordes con el nuevo espíritu descentralizador, pero coherentes en su sentido profundo con la idea de racionalización de la gestión. Ambas líneas de preocupación están íntimamente relacionadas en sus orígenes y evolución con los avatares que han acompañado el despliegue del Estado Liberal en España.

Determinar una entidad supone, entre otros requisitos, fijar los límites que la separan y, por tanto, la individualizan con respecto a otros ámbitos espaciales. Los límites geográficos siempre han sido motivo de conflicto a lo largo de la historia: al producirse un choque entre realidades *naturales* (naciones, comarcas, razas, etc.) y creaciones *artificiales* (países, estados, provincias, etc.). Las comunidades de intereses se han visto forzadas por los avatares administrativos. Esto no ha sido privilegio exclusivo de las grandes unidades territoriales, sino que ha estado presente incluso en entidades de menor significado histórico. El presente trabajo es, como decimos, una aproximación de tipo general al tema, centrado en los dos aspectos señalados:

a) *Las propuestas de reorganización territorial de ámbito supraprovincial o la búsqueda de una racionalización en la compartimentación del espacio nacional.* La estructura tradicional del Antiguo Régimen³ fue destruida en el plano administrativo por la Revolución Liberal que introdujo una nueva compartimentación del espacio nacional basamiento del actual sistema de provincias. Pero esta nueva realidad organizativa tuvo desde el principio sus detractores que plantearon alternativas, en unos casos en nombre precisamente de los mismos criterios de funcionalidad, en otros como manifestación de los nuevos idearios políticos que fueron surgiendo en el XIX a la búsqueda de una diferente articulación no sólo del espacio, sino de los hombres. El rasgo más destacado de estos planteamientos ha sido la *cambiante* concepción de los límites de algunas de las nuevas unidades territoriales y al mismo tiempo la *persistencia* intemporal de los de otras.

Ya en la primera mitad del siglo XIX, pocos años después de materializarse la división administrativa de 1833, con el establecimiento del actual sistema de provincias, se defendían, en el seno de una concepción política radicalmente diferente a la que dominaba en los grupos dirigentes, otras formas de organización del país, proyectos que conllevaban una nueva estructuración del territorio, que, en algunos aspectos, era una vuelta al pasado. Esta preocupación enlazaba con la tradición del republicanismo federal cuyas primeras y embrionarias manifestaciones aparecen antes de la muerte de Fernando VII (Lista, Xaudaró, etc.), como alternativas a su gobierno despótico. Como es bien conocido, desde el primer momento el republicanismo español es federal⁴, no sólo por el ejemplo de los Estados Unidos, sino también por la conciencia de que España se constituyó por agregación, logró su unidad na-

³ Nos referimos a la estructura que se consolidó a partir del siglo XVIII con la obra centralizadora de los Borbones. Los Decretos de Nueva Planta terminaron con el particularismo jurídico-político de Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia que perdieron su condición de virreinos. El territorio español quedó dividido en grandes distritos administrativos, capitanías generales y provincias: Castilla la Vieja, Granada, Sevilla, Extremadura, Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca y Canarias, permaneciendo como resto del pasado el virreinato de Navarra.

⁴ Trujillo, G., *Introducción al federalismo español*, Madrid, Edicusa, 1967.

cional a base de ir integrando partes de acusada personalidad histórica, presentando de esta forma, al llegar el XIX, unos componentes mal soldados entre sí.

Wenceslao Ayguals de Izco en su *Cartilla del Pueblo*, de 1842, obra de divulgación de un modelo federal, presentaba una estructura política, aunque simple, tan precisa en sus aspectos de división del país, que incluso recogía la capitalidad de las nuevas unidades territoriales, llamadas «divisiones naturales», cada una de las cuales era caracterizada como «la que está marcada por un grande interés local fundado en la configuración geográfica de una parte del país; v.g. en el curso de un río, en la dirección de las grandes cordilleras, etc.»⁵. Estas unidades espaciales eran:

<i>División Natural</i>	<i>Capital</i>
Andalucía Occidental	Sevilla
Andalucía Oriental	Granada
Murcia con Alicante	Murcia
Valencia con Teruel	Valencia
Aragón con Tortosa y Molina	Zaragoza
Cataluña	Barcelona
Vasconia (inclusa la Navarra)	Vitoria
Castilla entre ríos	Burgos
Castilla del Canal	Valladolid
Castilla-León	Zamora
Castilla-Mancha	Toledo
Centro-Castilla	Madrid
Extremadura	Cáceres
Galicia	Santiago
Asturias	Oviedo

Aquí está ya presente el fenómeno al que se ha aludido. Algunas de estas unidades territoriales mantendrán su caracterización hasta nuestros días, pasando incólumes por las diversas opciones que se plantearon. Otras sufrirán ligeros retoques y otras, por último desaparecieron. En algunos casos la territorialización propuesta, basada en evidentes criterios funcionales, se haría políticamente inviable con el paso del tiempo. La capitalidad queda resuelta en la mayoría de los casos con agudeza. Destaca, sin embargo, un caso, el de Extremadura, en el que el tiempo introduciría sensibles variaciones. Siendo una de las unidades espaciales que de manera constante aparece en todos los proyectos como entidad claramente diferenciada, es la única en la que la capital se terminaría estableciendo en otra población⁶. Primó eviden-

⁵ Ayguals de Izco, W., «Cartilla del Pueblo. Diálogos políticos entre Guindilla y el Tío Rebenque» recogida en el apéndice documental de Trias, J.J. y Elorza, A., *Federalismo y Reforma Social en España (1840-1870)*, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1975, pp. 344-365.

⁶ Cáceres no sólo perdió la capitalidad regional, sino que ya en el propio siglo XIX tuvo problemas para mantener la provincial que le fue disputada por Plasencia. Puede verse a este respecto la ponencia presentada por Antonio José Campesino Fernández al I Congreso sobre Plasencia y su tierra, 1986. La ciudad de Badajoz, por su parte, estuvo también a punto de perder la capitalidad de su provincia en favor de Mérida. Así lo había previsto la Comisión formada en el Trienio Constitucional para el estudio de

temente en la consideración de Cáceres⁷, su carácter más céntrico con respecto a todo el ámbito-extremeño.

Durante el Sexenio Democrático, la cuestión de la reestructuración del ámbito espacial nacional atrajo la atención de muy distintos personajes y movimientos que, por ello mismo, defendían unos planteamientos, acerca del contenido y alcance de la reforma, radicalmente diferentes. En algún caso, y sin cuestionar ni la estructura monárquica del Estado ni demás aspectos de su entramado constitucional, también se quiso poner en discusión la estructura provincial española aprobada en 1833. A las Cortes llegó, en los últimos momentos de la monarquía de Amadeo I, cuando ya no había ocasión por la gravedad de la crisis política de prestarle atención, una proposición de Ley del diputado Pedro Cisa y Cisa «estableciendo una nueva división territorial, tanto en la Península como en Ultramar». El interés del asunto estribaba en las consideraciones que lo acompañaban, que reflejan unos criterios de modernidad indudables, aun cuando pueden ser discutibles. La proposición, muy escueta, iba precedida por un preámbulo, declaración de intenciones en el que se justificaban la necesidad y oportunidad del proyecto. La opinión de Cisa sobre la reforma de 1833 era contundente: «este aumento de provincias, lejos de proporcionar un bien al país, ha sido una rémora para el mismo»⁸.

Quedaba, pues, apuntado el defecto básico del sistema provincial vigente: era una rémora al progreso, su *centralización* resultaba paralizante, al poner en manos del poder central todas las decisiones e impedir a cada ámbito la concreción de sus intereses⁹. Por otra parte, habían desaparecido ya los obstáculos que en otros momentos podían haber hecho aconsejable tan excesiva compartimentación. Si en el pasado los problemas de comunicación impedían una adecuada articulación de la tarea de gobierno, ya en aquel momento la *revolución de los transportes* permitía atender a la gestión de los asuntos sin necesidad de requerir espacios reducidos. Esto convertía a la división provincial en un arcaísmo incompatible con los nuevos tiempos. Otra de las ventajas de la descentralización, porque la nueva provincialización conllevaba no sólo un aspecto territorial, sino también una adecuación funcional, era el ahorro (por reducción del número de altos funcionarios). Se debía volver, pues, según este proyecto, a las 14 provincias del pasado, «las mismas con sus límites que tenían en 1833». El organigrama de la administración provincial seguiría siendo el mismo, dirigidas por un gobernador y una diputación. Acorde con los deseos de modernización de la vida nacional, se buscaba una racionalización de la estructura de la diputación, estableciendo el número de diputados en función de la población.

la nueva división territorial del país, al considerar que la ciudad emeritense reunía las circunstancias políticas requeridas, pues «Badajoz, plaza fronteriza y colocada en un extremo, no podía seguir siendo capital», Madoz, P., *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar*, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fernández, 1846, II, p. 123.

⁷ Ya José I, en 1810, consideró a Cáceres capital de una de las nuevas unidades administrativas.

⁸ Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, Apéndice decimosegundo a la sesión nº 47. La proposición está firmada el 5-XI-1872.

⁹ Esta idea aparecía en Ayguals de Izco, para el que estructurar la federación sobre la base de la división provincial vigente sería únicamente fuente de confusión y contradicción y causa de que las provincias cayesen pronto nuevamente bajo el centralismo de Madrid.

El análisis de las competencias atribuidas a las nuevas provincias muestra que se trataba de crear unas grandes entidades puramente administrativas con *autonomía de gestión* sobre todo en el aspecto económico, verdadero eje motivador del proyecto, realizando todas las funciones del Ministerio de Fomento (agricultura, educación, etc.).

Pero lo más destacado en este plano de la territorialización de España durante el Sexenio fue la aportación del movimiento federal. A partir de 1869, con los pactos federales, se inició la puesta a punto de una futura reorganización espacial. Resulta de interés, en el aspecto que aquí interesa, llamar la atención sobre el celebrado en Valladolid el 15 de junio por los representantes de las 17 provincias castellano-leonesas. Allí se definió la estructura de los dos estados castellanos. Uno, el de Castilla la Nueva, englobaba a la provincia de Albacete, el otro, Castilla la Vieja, incluía a las provincias castellanas (con Logroño y Santander entre ellas) y a las leonesas. Hay en esta territorialización aspectos con futuro (integración de Albacete), junto a otros conflictivos y de escaso porvenir (no individualización de Logroño y Santander), como pocos años después se puso de manifiesto. La estructuración territorial prevista en el proyecto de Constitución federal de 1873, que tiene antecedentes en estos trabajos anteriores y en otros como el de Almirall¹⁰, dividía a la Nación Española, dejamos al margen la consideración de las colonias, en 15 estados, 13 peninsulares y 2 insulares, que se correspondían con las tradicionales divisiones administrativas del Antiguo Régimen. Estructura que, con ligeros retoques internos, sería la adoptada en nuestros días para la división autonómica, con la única salvedad de Andalucía, pues, de acuerdo con los planteamientos ya conocidos, se dividía en dos, Alta y Baja¹¹. Desaparecida la I República, y entrado el federalismo en una fase de decadencia, siguieron, no obstante, los representantes del movimiento su tarea, cada vez más en el vacío, de articular el modelo federal poniendo a punto las constituciones de los diferentes estados¹².

En el activo de este movimiento federal hay que incluir también otra manifestación de la territorialización que contemplaba una nueva vertiente del problema. Se

¹⁰ *Bases para la Constitución Federal de la Nación Española y para la del Estado de Cataluña. Observaciones sobre el modo de plantear la Confederación en España*, 1868. El político catalán diseñó una estructuración estatal que, manteniendo la mayor parte de las líneas ya conocidas, presentaba algunas novedades. Así, agrupaba a Asturias y Galicia en una sola unidad estatal; desgajaba a León de Castilla la Vieja; integraba a Navarra con las Provincias Vascongadas y, volviendo a la terminología del pasado, cambiaba el nombre de los dos estados andaluces por el de sus respectivas capitales, Sevilla y Granada, lo que era explicitar demasiado las raíces de la diversidad de aquel ámbito espacial.

¹¹ Eran estos: Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Valencia y Regiones Vascongadas.

¹² La década de los años 80 fue fructífera en Asambleas nacionales y regionales. La de Zaragoza de 1883 aprobó un proyecto de *Constitución de la Federación Española*, mejor adaptada a las condiciones reales del país que la de 1873, que sería después revisada. Además en el contexto de este movimiento de reorganización del federalismo, y en el seno de asambleas regionales, se comenzaron a aprobar las correspondientes Constituciones para cada uno de los Estados de la Federación. Lo más interesante de este proceso de «institucionalización» es que confirma la existencia de unas unidades territoriales ya consagradas desde antiguo (Cataluña, Aragón, Galicia, Asturias, Extremadura, Navarra, etc.), reforma otras en las que subyacían problemas de unidad (Andalucía) y hace aparecer otras nuevas (La Rioja). Cfr. Rodríguez Solís, E., *Historia del Partido Republicano español*, Madrid, 1892-93, pp. 764-766.

trata del planteamiento *iberista*, que sin ser patrimonio exclusivo de estos republicanos, recibió importante atención¹³. Al margen de otras consideraciones, en las bases aprobadas en el Pacto Nacional de 1869, se estipulaba la «unión espontánea e indestructible entre España y Portugal»¹⁴. Pasada la etapa de la I República la idea siguió presente incluso entre otros republicanos desgajados del tronco federal¹⁵. El iberismo afectó a los proyectos de compartimentación espacial de España en el sentido de que al romperse la idea de frontera, algunas de las previstas unidades territoriales del país ampliaron su perspectiva, planteando su integración con terrenos lusitanos para constituir nuevas estructuras político-administrativas de ámbito multinacional. Este sería el caso de Extremadura. En 1888 un representante del federalismo cacereño marchó a Lisboa para concertar una asamblea que estudiara la proclamación de la *Región Lusitana*, compuesta del centro de Portugal y las Extremaduras portuguesa y española. El posible acuerdo afectaba a la recién aprobada, en Badajoz, *Constitución* de Extremadura cuyo contenido debía ser asumido o modificado y, en última instancia, ratificado por la Asamblea federal del partido¹⁶. Este aspecto de las relaciones con Portugal volvería a ser retomado por el regionalismo de principio de siglo, teniendo como base evidentes razones de tipo económico¹⁷.

Pero por entonces comenzaba una nueva fase de la cuestión, el desarrollo del regionalismo. Con diferentes ritmos y motivaciones, según las zonas, en cada uno de los territorios que se consideraban entidad diferencial (que se correspondían con las tradicionales divisiones administrativas del pasado) diversos individuos y grupos intentaban desde dentro encontrar las razones para la legitimación de una nueva compartimentación territorial del espacio nacional que conllevara un reajuste de la estructura administrativa del Estado en un sentido descentralizador. El movimiento, de raíz mimético en la mayoría de los casos, pondría de manifiesto lo mucho de artificioso que subyacía en este intento de justificar con todo tipo de argumentos lo que sólo en determinadas situaciones era justificable, ignorando el camino que el federalismo había mostrado para llegar a los mismos objetivos que ahora se perseguían. El planteamiento regionalista, de base conservadora, aun cuando todo lo que sonase a descentralización tenía para muchos grupos de derecha resonancias separatistas y, por tanto, era condenable, desvió el tema del camino ya trazado por el federalismo, que se planteaba el asunto desde un ámbito puramente racionalista, mucho más acorde con los tiempos, y ahorrraba, además, los penosos esfuerzos para tratar de justificar dudosas, equívocas o inexistentes identidades nacionales como base de reclamación de la nueva territorialización.

Aquella estructura diseñada por los federales no tuvo ocasión de ponerse a prueba y el siguiente paso en este campo, la experiencia republicana de 1931, que constitu-

¹³ Sobre el movimiento iberista en el siglo XIX se pueden ver los trabajos de Teodoro Martín; uno incluido en *Cuatro ensayos de Historia de España*, Madrid, Edicusa, 1975; el otro, «El movimiento iberista en el siglo XIX» en el libro *Homenaje al profesor Domínguez Ortiz*, Madrid, 1980.

¹⁴ Jutglar, A., *Pí y Margall y el Federalismo Español*, Madrid, Taurus, 1975, I, p. 434.

¹⁵ Al constituir Nicolás Salmerón en 1891 el Partido Republicano Centralista en su Manifiesto fundacional defendía no sólo la autonomía regional, sino también la Unión Ibérica.

¹⁶ «El Cantón», 2-XII-1888.

¹⁷ Sánchez Marroyo, F., «Extremadura 1918-1919: Intentos de definición de una personalidad regional» en *Estudios de Historia Social*, 28-29, (1984), p. 404.

cionalizaba por primera vez la descentralización, no precisó en el texto constitucional, por razones obvias ya el modelo no era federal, la previsible o posible reorganización del espacio nacional. El rápido y precipitado fin de la segunda experiencia republicana impidió, salvo en algunos casos muy concretos, la concreción de las nuevas unidades territoriales.

b) *Los intentos de reajustes internos dentro de los nuevos espacios político-administrativos.* Como hemos apuntado, un segundo problema a resolver, una vez individualizado un determinado ámbito territorial, era el perfilar sus límites estrictos. La cuestión resultó conflictiva desde el principio y aún hoy dista mucho de estar resuelta. El nuevo estado autonómico diseñado por la *Constitución de 1978* se ha enfrentado al tema con ambigüedad. Por un lado ha intentado superar el tema rompiendo viejas unidades y regroupándolas en un intento de racionalización (caso de Murcia-Albacete). Por otro, sin embargo, diversos condicionantes han impedido que se actuara con valentía y se llevase la solución hasta el final (casos de Segovia y León). Queda pendiente, además, un segundo problema, los ligeros retoques, insignificantes en su importancia, pero de un alto significado político que hace su solución complicada. Los pequeños enclaves territoriales, incompatibles con la moderna racionalización administrativa, están todavía a la espera de una solución adecuada; porque la actualidad del tema es innegable¹⁸.

Ya en los primeros momentos de la reorganización provincial hubo que llevar a cabo ciertos acomodos internos que hicieron pasar unos territorios de unos ámbitos administrativos a otros. Efectivamente, a partir de 1833, al materializarse la división provincial que introdujo la racionalización liberal, comenzaron a producirse reajustes interprovinciales que rompieron tradicionales vínculos comarcales impuestos por la Naturaleza¹⁹. Extremadura, por ejemplo, se vio afectada por aquella reestructuración, intercambiando localidades con sus provincias vecinas²⁰. Este reajus-

¹⁸ Cfr. «El País», 20-XII-1987.

¹⁹ La racionalización administrativa no afectó al ámbito eclesiástico, que mantendría mucho más tiempo la ruptura de los límites tradicionales impuestos en el plano político. Cfr. Mateos Caballero, C., *Estructura eclesiástica y religiosidad popular en la diócesis de Coria en la segunda mitad del siglo XIX*, (Memoria de Licenciatura inédita), Universidad de Extremadura, 1986.

²⁰ El proceso, aunque es suficientemente conocido, merece alguna referencia aclaratoria. La Extremadura de fines del XVIII tenía unos perfiles ligeramente diferentes a los que adquiriría a partir de la reforma de Javier de Burgos. Un total de 20 términos municipales de la actual provincia de Cáceres y otros 7 de la de Badajoz quedaban en aquella fecha fuera de sus límites. Dos de ellos, Olivenza y Táliga, pertenecían aún a Portugal y hasta 1801 no se integrarían en España. Pero también es cierto que englobaba otros que después perdería. Los intentos de división territorial del Trienio Liberal no pudieron, por la brevedad de la experiencia constitucional, concretarse en nada efectivo. Sobre el papel, la variación de los límites tanto entre las dos provincias extremeñas, como entre ellas y las limítrofes fue sensible. En 1822 quedaban fuera de la actual Cáceres, además de algunos de los pueblos norteños ya conocidos (Descargamaria y Robledillo de Gata) los cinco de Las Hurdes y otros limítrofes, Casar de Palomero y La Pesa; todos ellos integrados en Salamanca. También perdía en favor de Toledo varios de los pueblos de la Jara (Valdelacasa, Villar del Pedroso y Carrascalejo), aunque recibía de esta provincia las dos únicas adquisiciones del conjunto extremeño: Torrico y Valdeverdeja. Allí pasaba a Ciudad Real. Badajoz perdía 18 pueblos, en su mayoría, 11 (Valdecaballeros, Castilblanco, Herrera del Duque, Helechosa, Tamurejo, Fuenlabrada, Villarta, Garlitos, Baterno, Peñalsordo y Capilla) pertenecientes a la Siberia, que pasaban a Ciudad Real, Otros 5 (Azuaga, Puebla del Maestre, Fuente del Arco, Valverde de Llerena y Malcocinado) se integraban en Sevilla y 2 (Higuera la Real y Fuentes de León) en Huelva. Las pérdidas de Badajoz se compensaban con los 17 pueblos que recibía de Cáceres (todos los situados en la vertiente

te no dejó de plantear problemas y el sentimiento secesionista se mantuvo durante algún tiempo, sobre todo por parte de aquellas localidades que habían conocido una fuerte integración comarcal ahora deshecha. Tuvo una clara manifestación en los pueblos de la *Jara* toledana, con centro tradicional en Talavera de la Reina y excesivamente alejados de la capital provincial, Cáceres. A las Cortes Constituyentes de 1869, después de más de 30 años de la integración, llegó una petición de varios de estos pueblos solicitando su agregación a la provincia toledana²¹. Pero el paso del tiempo fue haciendo olvidar estos proyectos a los que no debían ser ajenos intereses de particulares.

Aunque la Constitución de la II República preveía, de manera genérica, en su artículo 10, la posibilidad de estas agregaciones e integraciones de parte de unas unidades territoriales en otras, sin embargo, la lentitud del proceso autonómico, pasado a segundo plano ante la gravedad de los problemas a resolver, lo corto de la experiencia republicana impidieron materializar algunos de estos cambios. No por ello faltaron iniciativas, que quedaron en vagos proyectos dada la trascendencia del tema.

La ambigüedad de límites siguió pesando aunque referido a otros ámbitos. En el caso de Extremadura la cuestión se planteó casi siempre²² desde Andalucía, por lo que en realidad cabe atribuir a ésta los verdaderos problemas de indefinición. La cuestión arrancaba de dos condicionantes históricos²³: a) las tradicionales relaciones económicas existentes entre Extremadura y la parte más occidental de Andalucía; b) la sospecha de que el papel hegemónico sevillano supusiese en realidad la aparición de un centralismo de nuevo cuño en sustitución del de Madrid. Ambos facto-

meridional de la divisoria de aguas Tajo-Guadiana). El decreto de 30-XI-1833, que se inspiraba en el de 1822, aunque con algunas sensibles variaciones, hizo que, consideradas en conjunto ambas provincias, y con relación a los límites característicos del siglo XVIII, recibiese Extremadura más pueblos de los que perdió. La provincia de Cáceres cedió dos localidades, La Alberca y Sotoserrano, a Salamanca, y recibió dos docenas de entidades de población, entre ellas veinte municipios, de Salamanca (San Martín de Trevejo, Villamiel, Descargamaría, Robledillo de Gata, Baños, La Garganta y Hervás) Ávila (El Gordo, Berrocalejo, Bohonal y Talavera la Vieja) y Toledo (Castañar de Ibor, Peraleda de San Román, Garvín, Valdelacasa, Villar del Pedroso, Navalvillar, Carrascalejo, Guadalupe y Alía). Badajoz se vio menos alterada en su estructura tradicional, perdiendo siete, uno en beneficio de Sevilla (Guadalcanal), cuatro de Córdoba (Belalcázar, Villanueva del Duque, Hinojosa del Duque y Fuente la Lancha) y dos de Huelva (Cañaveral de León y Arroyomolinos) pero recibiendo tres de Sevilla (Higuera la Real, Fregenal y Bodon) y dos de Toledo (Valdecaballeros y Castilblanco). Sobre estos aspectos Cfr. Martínez Díaz, G., *Extremadura*, (ejemplar mecanografiado), Valladolid, Facultad de Derecho, 1984. Hasta 1836 no alcanzaron las dos provincias sus límites definitivos, al pasar la localidad de San Vicente de Alcántara de Cáceres a Badajoz.

²¹ Diario de Sesiones de Cortes Constituyentes, Sesión del 26-IV-1869, p. 1.392. El diputado Rodríguez Moya presentó una petición de Carrascalejo, Villar del Pedroso y otros pueblos vecinos de la provincia de Cáceres pidiendo de nuevo su incorporación a Toledo.

²² Empleamos la matización «casi» llevados tal vez de un sentido demasiado estricto, ya que de manera significativa sólo desde el ámbito andaluz alcanzó el tema realmente entidad. Lo que no significa que de forma aislada no se planteasen otras posibilidades. Así, en la primavera de 1936 se llegó a sugerir la viabilidad de una integración con Castilla la Nueva, «Hoy», 22-V-1936. Pero hay que entender esto como algo episódico, que no conllevó ningún tipo de profundización.

²³ Nos hemos referido de forma genérica a estos problemas en Sánchez Marroyo, F., «Notas sobre el regionalismo extremeño durante la II República», en *Norba*, IV, (1983), pp. 447-458, sin embargo el tema está aún a la espera de un estudio en profundidad, que esperamos pronto poner a punto.

res, operantes desde antiguo²⁴, se unirían a la hora de crear un ambiente propicio a la ruptura de los viejos esquemas fronterizos del pasado, que en el caso andaluz se añadían a la tradicional rivalidad Sevilla-Granada. Desde el punto de vista extremeño la idea resultaba atractiva porque proporcionaba una salida al mar.

Ya en el año 1931, cuando se debatía todavía la forma política que adoptaría el régimen republicano recién instalado en el país, se llevó a cabo una intensa campaña de prensa en Huelva en favor de tal integración. El «Diario de Huelva» fue el vehículo trasmisor de esta iniciativa, que encontró pronto eco en Extremadura, sobre todo en Badajoz. El movimiento arranca de la reunión convocada por el Presidente de la Comisión Gestora de la Diputación de Sevilla y celebrada el 7 de julio de 1931. Aunque Huelva se abstuvo de enviar representante, se adhirió, sin embargo, al acto en el que se tomó el acuerdo de redactar el proyecto de Estatuto Regional y someterlo a la consideración de las distintas entidades de cada provincia. Quedaba así planteada la necesidad de definirse, de tomar postura ante la inmediata reestructuración autonómica. Desde este momento comenzaron en aquel diario onubense a aparecer artículos en los que diversos individuos aislados (generalmente relacionados con actividades comerciales y portuarias) e instituciones manifestaban la conveniencia de la integración en Extremadura. La idea así lanzada halló inmediato eco. El diario pacense «Correo Extremeño» incluyó en sus páginas estos escritos, adhiriéndose a aquellos planteamientos. En Cáceres la respuesta fue más mesurada al principio, aunque luego se aceptó plenamente²⁵. En Badajoz la respuesta fue más entusiasta desde los primeros momentos. El argumento central, salida al mar, se reforzaba con otras ideas: rivalidad Huelva-Sevilla, recuerdo a América, etc., llegándose, incluso a invadir el terreno de la antropología, tratando de justificar la existencia de rasgos diferenciales excluyentes en los onubenses con respecto a los demás andaluces. En última instancia se postulaba la urgencia de constituir una sociedad *Pro-Unión Huelva Extremadura*, para lograr coordinar los esfuerzos y dar mayor difusión a la idea.

²⁴ El recelo ante la preeminencia sevillana era antiguo. Cuando en el verano de 1873 se extendió por Andalucía el movimiento cantonalista, Huelva no le secundó, «por disenso de su Junta con la de Sevilla» y, además, «se adhirió al Gobierno; pero advirtiéndole que cuando se votase la Constitución Federal quería permanecer independiente de Sevilla», Pi y Suñer, F. y Pi y Margall, F., *Conmociones políticas del siglo XIX en España*, Barcelona, Casa Edit. Seguí, s/f, p. 136. Por otro lado desde antiguo la expresión Bético-Extremeña ha tenido amplio eco y no es posible olvidar lo que escondía. El diario sevillano «La Andalucía» propugnaba ya desde 1860 una «Unión Bético-Extremeña», cuyo nombre es suficientemente elocuente. También existió una *Revista de Morón y Bético-Extremeña*, y se celebró a principios del siglo XX una exposición *Onubo-Extremeña*, por citar algunos ejemplos, que hablan de la existencia de afinidades seculares, con una evidente raíz económica. En otro orden de cosas debe recordarse como en la década de los 80 del pasado siglo y dentro del proceso de articulación institucional llevado a cabo por los federales Almería llegó a poner a punto su propia constitución.

²⁵ Al referirse en 1932 a la reunión celebrada entre representantes de las Cámaras de Comercio de Badajoz, Cáceres y Huelva y del comité administrativo del puerto onubense el entusiasmo hizo exclamar el articulista de un diario cacereño: «desde que conocemos el deseo de los onubenses no cabemos de gozo en el pellejo (...) Extremadura (...) tendrá su salida al mar, con un puerto de verdad mirando a América y comerá sardinas baratas porque se producen dentro de casa», se aprovechó incluso la ocasión para mostrar el resentimiento anticatalanista, «¡Somos más grandes que la Generalidad, porque nosotros sin pedirlo tendremos anexión territorial y Cataluña no!», «Nuevo Día», 26-VII-1932.

Un empleado del puerto, Manuel Pérez y Pérez, protagonizó una activa campaña de prensa en favor de la integración ²⁶.

El asunto, que permaneció soterrado por las graves tensiones sociales vividas en aquellos ámbitos, volvería a reaparecer en vísperas de la Guerra Civil, cuando el Ayuntamiento de la ciudad onubense presentó una propuesta, defendida por la minoría federal, lanzando la idea de un Estatuto de Autonomía para la región extremeña, en la que entraría a formar parte la provincia andaluza. Dejando a un lado consideraciones nacionalistas, que evidentemente no venían el caso, se trataba de conseguir una simple «mancomunidad administrativa». La propuesta concretaba el camino a seguir para culminar el proceso de integración. En cada provincia se celebrarían asambleas de municipios para manifestar su postura ante la idea. Según lo aprobado en estas reuniones, se celebraría una nueva Asamblea, en Badajoz, de donde saldría sellado el pacto de las tres provincias ²⁷. No era la única tentativa secesionista en Andalucía. Hasta el final de la experiencia republicana persistirían también los intentos de Granada para conseguir el reconocimiento de un papel protagonista en el ámbito autonómico. En este sentido, ya en las últimas semanas de vida republicana, el Ayuntamiento de la capital acordaba que en la Asamblea de representantes de municipios de las provincias andaluzas, que se celebraría en Sevilla para tratar del Estatuto de la región, se defendiese la necesidad de crear dos regiones andaluzas. Obviamente Granada solicitaba la capitalidad de Andalucía Oriental. El comienzo de la Guerra Civil impediría la materialización de estos intentos. De esta forma no podría calibrarse el grado de apoyo popular a estas propuestas que tenían un claro origen en los intereses urbanos.

La previsible inminencia del reajuste político-administrativo del Estado hizo reaparecer en Extremadura, durante el verano de 1931, otros intentos de territorialización, en este caso de tipo secesionista, ya con vieja tradición en la provincia de Cáceres ²⁸. El abogado placentino Ángel Albarrán, Presidente del Círculo Católico, al mismo tiempo que se manifestaba anticentralista y regionalista convencido, actualizaba, tomando como fundamento la obra de Lucas Mallada ²⁹, la reclamación de una nueva división provincial. Con los territorios cacereños al Norte del Tajo se constituiría la provincia de Plasencia. La de Cáceres se extendería entonces más hacia el Sur, a costa de Badajoz ³⁰.

En resumen, aceptada desde antiguo en diferentes ámbitos la conveniencia y necesidad de llevar a cabo una reestructuración político-administrativa del espacio na-

²⁶ Pérez y Pérez, M., *Pro Huelva-Extremadura*, Huelva, Imp. A. Plata, 1932, se trata de un libro donde recoge 26 de sus artículos sobre el tema. Significativamente la obra se divide en dos partes: «Con Sevilla No» y «Con Extremadura Sí».

²⁷ A.M. de Badajoz, *Actas de Sesiones Municipales*, sesión de 29-VI-1936.

²⁸ Ya en los años 40 del pasado siglo, Madoz, que no consideraba justificada la reclamación de la capitalidad de la Alta Extremadura por parte de Plasencia, entendía, sin embargo, como razonable la división de las dos provincias en tres, tomando a los grandes ríos, Tajo y Guadiana, como límites naturales de los nuevos espacios administrativos. En este caso a Plasencia le correspondería la capitalidad de la parte más septentrional. Madoz, P., op. cit., V, pp. 70.

²⁹ Mallada, como miembro de la Comisión del mapa geológico, había editado en 1861 un folleto en el que defendía una nueva división territorial del país.

³⁰ Entrevista aparecida en *Nuevo Día*, 27-VIII-1931.

cional, salvo en casos muy concretos no siempre ha habido acuerdo a la hora de determinar los límites territoriales de las nuevas unidades. El federalismo fue el único que con carácter general, aunque con vacilaciones, marcó el camino al regionalismo en la búsqueda de una nueva vertebración espacial anticentralista de España. Su planteamiento, profundamente racionalista ³¹, dio vida a una coherente y flexible división del país, al margen de angustiosas búsquedas de identidades inexistentes en la mayoría de los casos. Además, y como consecuencia de estos problemas de indefinición, caracterizados los nuevos marcos, en el seno de ellos han persistido tendencias centrífugas que plantearon, y plantean todavía hoy, la conveniencia de poner a punto leves reajustes territoriales.

³¹ No es este el lugar para insistir en las profundas diferencias doctrinales entre el planteamiento federalista, basado en el individualismo racionalista, del regionalista, fundamentado en el irracionalismo nacionalista.